

EL GOBIERNO DE HAMAS: CRÓNICA DE UN FRACASO ANUNCIADO

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO*

Un año después de su victoria electoral, Hamas se encuentra atrapado entre dos fuegos: bien formar un gobierno de coalición con Fatah, bien dejar que la situación sobre el terreno continúe agravándose como consecuencia del boicot de la comunidad internacional. Tampoco Estados Unidos parece tener una estrategia plenamente definida, oscilando entre una reanudación condicionada del proceso de paz y la apuesta por el desarme de las milicias islamistas, lo que podría acarrear una guerra civil.

El 25 de enero de 2006 la formación islamista Hamas se impuso en las elecciones legislativas palestinas contra todo pronóstico. Este primer año de gobierno se ha caracterizado por el aislamiento del Ejecutivo islamista, la escalada de tensión con Israel en Gaza, el deterioro generalizado de las condiciones de vida de la población ocupada y, por último, la intensificación de la rivalidad entre Fatah y Hamas. Así las cosas, cada vez es más recurrente el debate sobre si nos encontramos en la antesala de una guerra civil palestina o, como en anteriores ocasiones, la sangre no llegará al río y los palestinos se detendrán ante esta infranqueable "línea roja".

El principal beneficiado de esta nueva situación es el Gobierno israelí que, tras el fracaso del Proceso de Oslo, se decantó por el unilateralismo, intentando fijar las nuevas fronteras de Israel por medio de la construcción del

* Profesor de Estudios Árabes e Islámicos. Universidad de Alicante.

muro de separación. Esta política unilateral requiere, obligatoriamente, que no exista un interlocutor válido en la parte palestina. Cuando en noviembre de 2004 murió Yaser Arafat, Israel no hizo el menor esfuerzo para afianzar la posición de Mahmud Abbas *Abu Mazen* como nuevo presidente de la Autoridad Palestina (AP), a pesar de sus denodados esfuerzos para lograr una tregua de larga duración de las facciones armadas, lo que reforzó a Hamas. El hecho de que la organización islamista figure tanto en la lista terrorista europea como estadounidense garantiza que ni Bruselas ni Washington presionarán a Tel Aviv para que retome las negociaciones de paz.

El fracaso del “paso a paso” de Hamas

La victoria, por mayoría absoluta, de Hamas en las elecciones legislativas de enero de 2006 tomó por sorpresa a la mayor parte de la comunidad internacional que, por medio del Cuarteto de Madrid –formado por Estados Unidos, la Unión Europea, la Federación Rusa y las Naciones Unidas–, estableció tres requisitos indispensables para aceptar al nuevo gobierno palestino. De una parte el reconocimiento del Estado de Israel, de otra parte la renuncia al terrorismo y, por último, el respeto al marco establecido por los Acuerdos de Oslo.

Por medio de este triple condicionamiento, la comunidad internacional buscaba aislar a Hamas y provocar el colapso del Ejecutivo en pocos meses, situación que sería aprovechada para restablecer el *statu quo* precedente y devolver a Fatah el papel hegemónico que había venido jugando las cuatro décadas anteriores en la escena política palestina, a pesar de su manifiesta incapacidad para impulsar la creación de un Estado independiente. También los países árabes del entorno, mayoritariamente sunníes, respaldaban esta política, ya que estaban alarmados porque “el efecto Hamas” se extendiera al resto del mundo árabe y que sus respectivos partidos islamistas reclamasen también la celebración de elecciones transparentes y su incorporación al gobierno. El hecho de que tanto los líderes de Hamas del interior como del exterior hayan mantenido unas excelentes relaciones con el régimen teocrático iraní tampoco ha contribuido a mejorar su imagen entre los dirigentes árabes y, mucho menos, en el caso de Estados Unidos e Israel.

A pesar de su incuestionable éxito en la paralización efectiva de la labor gubernamental palestina, la aplicación de estas medidas ha tenido efectos contraproducentes, ya que ha cortado de raíz la posibilidad de que la corriente pragmática

de Hamas logre afianzarse en la dirección del movimiento y ha dado alas a sus sectores radicales, partidarios de volver a la dinámica del “sólo hablan las bombas”. En este sentido es pertinente recordar que la Carta fundacional de Hamas señala expresamente que “no hay otra solución a la cuestión palestina que el *yihad*” y se considera a Palestina como “un territorio islámico para todas las generaciones de musulmanes hasta el día de la Resurrección”, aunque también es cierto que en el curso de los últimos meses se han registrado movimientos significativos hacia la aceptación *de facto* del Estado de Israel.

Debe tenerse en cuenta que en el seno de Hamas coexisten varias corrientes que van desde el posibilismo del primer ministro Ismail Haniye hasta el maximalismo del exiliado Jaled Mashal y que ambos libran un pulso para imponer las directrices que seguirá el movimiento en los próximos años. En el trasfondo de este enfrentamiento también puede observarse la tensión latente entre el liderazgo palestino del interior, normalmente más inclinado hacia el compromiso político, y el del exterior, más sensible a las presiones de otros actores regionales –como Siria o Irán– que les dan respaldo. El hecho de que la organización, tras doce meses de asfixia del Ejecutivo palestino por parte de la comunidad internacional, se decante por una u otra opción no debería resultarnos ni mucho menos indiferente, ya que de ello depende en gran medida la estabilidad de la región.

Aunque normalmente los líderes de Hamas coinciden en que el reconocimiento de Israel sólo llegará con el nacimiento de un Estado palestino independiente y soberano, también es cierto que en los últimos meses han dado muestras de que éste podría estar mucho más cerca de lo esperado. Cuando Hamas adoptó la decisión de participar en las elecciones legislativas aceptaba también tomar parte en la gestión de la Autoridad Palestina creada por los Acuerdos de Oslo. En el programa electoral con el que concurrió a las elecciones, se afirmaba expresamente que, a partir de ahora, se emplearán “todos los medios” para poner fin a la ocupación, en una clara alusión al abandono de la doctrina del “sólo hablan las bombas”. Es más, este nuevo posicionamiento entra en abierta contradicción con la propia carta fundacional del movimiento. Ante la imposibilidad de imponerse en el terreno de batalla a Israel, Hamas podría estar dando señales de que está dispuesta a adoptar una posición más pragmática y seguir una política de “paso a paso”, como en su día hiciera Fatah.

El 10 de enero de 2007, en unas declaraciones a la agencia Reuters, el máximo dirigente de Hamas en el exterior, Jaled Mashal, manifestó: “Como

palestino reclamo un Estado en las fronteras de 1967. Es verdad que en realidad habrá una entidad o estado llamado Israel en el resto de la tierra palestina. Es un hecho resultado de factores históricos". Es decir, que por una parte reconoce que las reivindicaciones de Hamas se limitan a un Estado sobre Gaza y Cisjordania con Jerusalén Este como capital y, por otra, reconoce que el Estado israelí es un hecho consumado. Sin duda este nuevo posicionamiento tiene mucho que ver con las negociaciones para la constitución de un gobierno de coalición entre Hamas y Fatah. No obstante, y a pesar de su incuestionable valor, estas declaraciones no han servido para rehabilitar a Hamas ni mucho menos para poner fin al bloqueo internacional sobre el Ejecutivo palestino, lo que demuestra que la política del "paso a paso" emprendida por Hamas no ha alcanzado los resultados deseados y que la comunidad internacional sigue considerando una anatema la rehabilitación de la formación islamista.

Las limitaciones de la operación "Lluvia de Verano"

El 28 de junio de 2006 dio comienzo la operación "Lluvia de Verano" contra Gaza. Un año después de la retirada unilateral israelí de la estrecha franja mediterránea, las Fuerzas Armadas volvieron a atacarla por tierra, mar y aire. La crisis se había iniciado unos días antes, cuando un comando palestino atacó un puesto militar israelí y secuestró al cabo Gilad Shalit, en cautividad desde entonces, en represalia por el "asesinato selectivo" del líder del brazo armado de Hamas, lo que implicó la ruptura de la tregua unilateral mantenida desde hacía un año. En el curso de la ofensiva, Israel detuvo a cientos de personas, entre ellos ocho ministros del Ejecutivo islamista y 28 parlamentarios y alcaldes de Hamas (incluido Aziz Dweik, presidente del Consejo Legislativo Palestino).

Lo que en un principio parecía un episodio más del sempiterno enfrentamiento palestino-israelí se convirtió pronto en una crisis de dimensión regional, ya que el 12 de julio la milicia libanesa de Hezbolá entró en escena secuestrando a dos nuevos soldados hebreos en la zona fronteriza. La respuesta israelí no se hizo esperar, ya que lanzó una ofensiva aérea contra las infraestructuras civiles libanesas (aeropuertos, puentes, autopistas, centrales eléctricas, así como varios suburbios de Beirut), calificada de "desproporcionada" por buena parte de la comunidad internacional, que provocó más de un millar de muertes y el éxodo de 750.000 personas, sin conseguir con ello poner fin al poderío militar de Hezbolá ni tampoco fortalecer al pro-occidental gobierno de Siniora. La resolución 1.701 del Consejo de Seguridad reforzó a la FINUL y aprobó el des-

pliegue de nuevas tropas internacionales en la denominada "línea azul" para impedir la reanudación de las hostilidades, entre ellas un batallón español.

El hecho de que las Fuerzas de Defensa Israelíes no logran liberar a los soldados secuestrados ni en Gaza ni tampoco en Líbano desató una tormenta política de enormes dimensiones. No debe infravalorarse el hecho de que, en una sociedad militarizada como la israelí, los puestos de mayor peso del Ejecutivo recaigan en la actualidad en dos civiles que no cuentan prácticamente con experiencia militar: el primer ministro, Ehud Olmert, y el ministro de Defensa, Amir Peretz, ambos fuertemente cuestionados en la actualidad. Esta situación, inédita en la política israelí, ha provocado numerosas críticas de los sectores "halcones" y ha desencadenado un encendido debate sobre sus responsabilidades en el manejo de la guerra. Este fuego cruzado en el que se vieron inmersos desde el comienzo de la batalla aumentó el peso de los sectores duros del ejército israelí, comandados por el posteriormente dimitido Dan Halutz, jefe del Estado Mayor, partidarios de medidas drásticas como la extensión del conflicto a Irán, país que rechaza detener su programa de enriquecimiento de uranio pese a las presiones de la comunidad internacional.

Precisamente Irán ha sido el gran beneficiado de esta y también de las últimas crisis regionales. Según desvela un informe publicado por The Royal Institute of Foreign Affairs de Londres con el esclarecedor título *Iran, Its Neighbours and the Regional Crises*, "no cabe ninguna duda de que Irán ha sido el principal beneficiado de la guerra contra el terror en Oriente Próximo. Estados Unidos ha eliminado dos de los rivales regionales de Irán –los talibanes de Afganistán en noviembre de 2001 y el régimen de Sadam Hussein en abril de 2003–, pero ha fracasado a la hora de reemplazarlos con estructuras políticas coherentes y estables. El estallido de conflictos en dos nuevos frentes en junio y julio de 2006 entre Israel y los palestinos en Gaza de una parte, e Israel y Hezbolá en Líbano de otra, ha dado dimensiones regionales a esta inestabilidad. Irán ha logrado llenar el vacío con una aparente facilidad que ha sorprendido tanto a los actores regionales como a Estados Unidos y a sus aliados europeos. Irán es hoy en día uno de los más significativos y poderosos Estados en la región y su influencia se extiende por Oriente Próximo, Turquía, el Cáucaso, Asia Central y Asia del Sur"¹.

¹ <http://www.chathamhouse.org.uk/pdf/research/mep/Iran0806.pdf>.

El agravamiento de la crisis humanitaria: el Informe Dugard

Por el contrario, el principal perjudicado ha sido el pueblo palestino y, en particular, la población civil. Según un informe de B'Tselem, asociación israelí que vigila la situación en los territorios ocupados, en 2006 se registró un retroceso generalizado de los derechos humanos con la muerte de 683 palestinos (entre ellos, 141 menores), de los cuales 322 no tomaban parte en las hostilidades en el momento en que fueron asesinados. La cifra de israelíes muertos en ese mismo período fue de 17 civiles y 6 militares.

El proceso de paz, secundado sin fisuras por Estados Unidos y la Unión Europea, ha complicado la vida de la población palestina hasta lo inimaginable: Cisjordania ha sido convertida en un puzzle de bantustanes aislados entre sí, la expropiación de tierras se ha multiplicado como consecuencia de la construcción del muro de separación y la colonización israelí se ha acelerado poniendo fin a la continuidad territorial palestina. Según el Ministerio del Interior israelí, el número de colonos en Cisjordania habría crecido casi un 6% durante 2006: es decir, que se habría multiplicado por cuatro con respecto a 2005 cuando creció en un 1,4%. De tal manera que los 126 asentamientos habrían pasado de albergar a 253.748 colonos a 268.379. Si a éstos les sumamos los 225.000 colonos que viven en Jerusalén Este, la cifra de colonos en los territorios ocupados se acercaría al medio millón. Por otra parte, Israel mantiene 54 controles militares permanentes y otros 160 itinerantes en Cisjordania, que rompen la continuidad territorial e imposibilitan el libre desplazamiento de personas y mercancías.

A consecuencia del bloqueo del Ejecutivo islamista y de los castigos colectivos israelíes, la crisis humanitaria no deja de agravarse. La Franja de Gaza, que en sus 362 kilómetros cuadrados acoge a un millón y medio de refugiados, ha sido la golpeada con más saña. Desde la captura del cabo Shalit, las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa Israelíes para poner fin al lanzamiento de misiles artesanales al-Qassam desde Gaza han provocado 405 víctimas palestinas (de los cuales 205 no intervenían en los choques). Cuando en verano de 2005 se llevó a cabo la evacuación de Gaza, los analistas internacionales se dividieron entre quienes lo consideraban un paso en la buena dirección que propiciaría la reanudación del proceso de paz y quienes advirtieron que Gaza se convertiría en una enorme prisión, dado el mantenimiento del control de sus fronteras por Israel. El notable deterioro de la situa-

ción económica, política y social registrado desde entonces parece dar la razón a estos últimos. Un 74% de la población de Gaza vive bajo el umbral de la pobreza, mientras que el desempleo afecta al 45%. Además, el bloqueo aéreo, terrestre y marítimo, intensificado tras la victoria electoral de Hamas, provocó el desabastecimiento de productos de primera necesidad, colocando a la población en la situación más delicada desde que se iniciase la ocupación, hace ya cuatro décadas.

El 5 de septiembre el jurista John Dugard, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que señalaba: "En buena medida, la crisis humanitaria ha sido provocada por la interrupción de la financiación de la Autoridad Palestina desde que Hamas ganó las elecciones. En primer lugar el Gobierno israelí está reteniendo el impuesto al valor añadido y los aranceles –entre 50 y 60 millones de dólares por mes– que cobra en nombre de la Autoridad Palestina por la importación de mercaderías al territorio palestino ocupado. Esos fondos constituyen el 36% del presupuesto mensual de la Autoridad Palestina o el 50% del efectivo de que dispone la Autoridad Palestina [...]. Esta disminución de los fondos de la Autoridad Palestina ha ido acompañada de una reducción drástica de los fondos que aportan los organismos y los países donantes. Ello ha tenido graves repercusiones en la labor de las ONG, que han debido suspender o cancelar sus proyectos relacionados con la labor de la Autoridad Palestina".

Es de especial interés el impacto que ha tenido en la sanidad y la educación esta reducción de ayudas. Según Dugard, "es evidente que la economía palestina, que depende en gran medida en los fondos de los donantes desde 1994, ha sufrido las dramáticas consecuencias de la retención de los fondos por Israel y la comunidad internacional desde la elección de Hamas. Este estrangulamiento económico ha tenido las repercusiones graves en los derechos económicos y sociales de los palestinos. Cerca de un millón de los tres millones y medio de habitantes de Palestina se ven directamente afectados por el impago de los sueldos de cerca de 152.000 funcionarios (y sus familias), pero el conjunto de la población también se ha visto afectado indirectamente. Además, como la Autoridad Palestina tiene a su cargo más del 70% de las escuelas y del 60% de los servicios de atención de la salud en el territorio, tanto la educación como la atención de la salud se han visto considerablemente afectadas".

La conclusión del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados era lapidaria: "Se ha sometido al pueblo palestino a sanciones económicas: nunca se ha tratado así a un pueblo bajo ocupación". Por último, Dugard pone el dedo en la llaga al afirmar: "Mientras tanto el pueblo palestino, más que la Autoridad Palestina, se ve sometido a las que tal vez sean las formas más estrictas de sanciones internacionales impuestas en los tiempos modernos. Es interesante recordar que los estados occidentales se negaron a imponer verdaderas sanciones económicas a Sudáfrica para obligarla a poner fin al *apartheid*, porque consideraban que con ello se perjudicaría a la población negra de Sudáfrica. Pero los palestinos y sus derechos humanos no suscitan la misma compasión".

Ante el agravamiento de la situación humanitaria, también el Parlamento Europeo se vio en la obligación de pronunciarse. El 16 de noviembre se aprobó una dura resolución en la que se mostraba "extremadamente preocupado por la magnitud catastrófica que ha alcanzado la crisis humanitaria a consecuencia de la masiva devastación de infraestructuras públicas y viviendas particulares, la perturbación del funcionamiento de hospitales, clínicas y escuelas, la denegación del acceso a agua, alimentos y electricidad, la destrucción de tierras agrícolas y el bloqueo total de la Franja de Gaza". Para paliar esta situación, la Unión Europea se ha visto obligada a incrementar la cuantía de sus ayudas –especialmente a programas de emergencia y de seguridad alimentaria–, aunque es evidente que el Mecanismo Internacional Temporal, creado para sortear cualquier contacto con Hamas, ha sido incapaz de hacer frente a las cada vez mayores necesidades de una población sometida a la arbitraria política de castigos colectivos israelí. Si se resigna a su actual papel de donante, la Unión Europea deberá estar preparada para financiar las cada vez mayores necesidades de una población al borde de la crisis humanitaria, encerrada tras el muro y privada de cualquier contacto con el exterior.

Tampoco parece factible que Bruselas pueda modificar fácilmente la situación, sobre todo si tenemos en cuenta que la Unión Europea tiene las manos atadas en el Cuarteto debido a la capacidad de veto norteamericana que, a la larga, cortocircuita cualquier iniciativa de paz europea. Precisamente el mencionado Informe Dugard arremetía también contra el Cuarteto por "haber perdido de vista un arreglo pacífico por cuanto impone medidas punitivas desti-

nadas a obligar a Hamas a cambiar su posición ideológica, o a provocar un cambio de régimen. Cabe preguntarse si las Naciones Unidas están autorizadas jurídicamente a participar en la coerción económica a través del Cuarteto sin seguir sus propios procedimientos estipulados en la Carta. En cualquier caso, la diplomacia ha cedido el paso a la coerción". Ante las expectativas de creación de un gobierno de Unidad Nacional palestino, diferentes países europeos, entre ellos España, Italia, Francia y Alemania, comenzaron a plantear diferentes iniciativas de cara a retomar el proceso de paz de Oriente Medio.

El Documento de los Prisioneros: ¿un gobierno de unidad nacional?

La escena política palestina se encuentra cada vez más cerca del abismo. El hecho de que un día se hable de la formación de un gobierno de Unidad Nacional y al día siguiente se advierta sobre el eventual estallido de una guerra civil así lo demuestra. La principal razón que explica la anarquía que impera en los territorios ocupados es la desesperación creciente ante el estrangulamiento que padece la Autoridad Palestina tras el ascenso al poder de Hamas.

Desde entonces, la comunidad internacional ha congelado la transferencia de fondos al Ejecutivo islamista, lo que ha vaciado las arcas palestinas y ha situado al borde del colapso a la sociedad en su conjunto. Baste recordar que los cerca de 150.000 funcionarios, mayoritariamente vinculados a Fatah, llevan seis meses sin percibir sus salarios, hecho que coloca en una situación de extrema vulnerabilidad a cerca de un millón de personas que dependen directamente de sus sueldos. Si a esta circunstancia le añadimos el férreo cierre impuesto a los territorios palestinos, aislados del exterior y encerrados tras el muro de separación, entonces podemos hacernos una idea de la gravedad de la situación.

Hamas, que en enero logró una abrumadora victoria en las urnas, no ha conseguido cumplir sus promesas electorales ni tampoco mejorar la situación de la población. Todo parece indicar que las rentas de las que vive, fruto de diez años de pertinaz oposición al proceso de paz, están a punto de esfumarse y que existe un creciente malestar ante su incapacidad para salir del callejón sin salida en el que ha metido a la cuestión palestina. La organización islamista no lo tiene fácil ni mucho menos. Si continúa dando muestras de pragmatismo (incorporación al juego político, participación en las elecciones,

mantenimiento de la tregua y señales en torno al reconocimiento de Israel), todo invita a pensar que, tarde o temprano, caerá en la tela de araña tejida por Israel.

Una eventual aceptación de las tres condiciones impuestas por la comunidad internacional –abandono del terrorismo, reconocimiento de Israel y aceptación del marco de Oslo– podría aliviar parcialmente la situación, aunque también tiene sus riesgos, puesto que es probable que Israel, como ya hiciera con Fatah en los últimos años de vida de Arafat, exija una nueva batería de concesiones –detención de presuntos terroristas, desarme de las milicias y abandono de sus credenciales islamistas para empezar– como paso ineludible para valorar una eventual reanudación del proceso de paz. En el caso de que decida, como ha hecho hasta ahora, exigir cierta reciprocidad –reconocimiento de Israel a cambio de la aceptación israelí de un Estado palestino independiente–, se encontrará con el boicot de una comunidad internacional que pretende, a toda costa, hacer fracasar el proyecto islamista y volver a la situación en la que Fatah mantenía el monopolio de la política palestina.

Tampoco Fatah tiene la capacidad, por sí sola, de cambiar las tornas. A lo sumo, un retorno de Fatah al poder, bien como parte de un gobierno de emergencia o después de la celebración de elecciones anticipadas, conseguiría apaciguar la situación durante algunos meses y mejorar ligeramente las condiciones de vida de la población, aunque tarde o temprano las diferencias entre dos proyectos políticos antagónicos volverían a aflorar y se oiría hablar de nuevo de guerra civil. La creación de un Estado palestino artificial sin unas fronteras claramente delimitadas, tal y como recoge la Hoja de Ruta y propone Estados Unidos no beneficiaría necesariamente a Fatah, ya que más que una victoria sería considerada una derrota por parte de la población, que vería cómo triunfa la política de hechos consumados israelí, basada en la colonización intensiva del territorio palestino y en la fijación de nuevas fronteras por medio de la construcción del muro. Lo que parece no comprender la comunidad internacional es que la piedra angular del problema sigue siendo la ocupación israelí y su pretensión de colonizar la mayor cantidad posible de territorio antes de que se vea abocada a aceptar una solución definitiva.

Por eso la aparición del denominado Documento de los Prisioneros, casi al mismo tiempo que se ponía en marcha la operación “Lluvia de Verano”, es de

suma importancia. Para poner fin a los enfrentamientos armados internos que han dejado un reguero de muertos, las facciones palestinas dieron un paso de gran envergadura. Dicho documento contiene varios elementos, pero quizás los más relevantes en la actual coyuntura política son dos. En primer lugar, Hamas acepta que el futuro Estado palestino se erija sobre Cisjordania y Gaza con Jerusalén Este como capital, lo que le aleja de sus anteriores llamamientos a la destrucción de Israel. En segundo lugar, las facciones palestinas acuerdan formar un gobierno de Unidad Nacional con el propósito de alejar el fantasma de la guerra civil.

Es significativo que este documento no fuera resultado de las negociaciones entre el presidente de la Autoridad Palestina, el nacionalista Mahmud Abbas, y el primer ministro, el islamista Ismael Haniye, sino fruto de las conversaciones de algunos de los más prominentes políticos palestinos que cumplen condena en las prisiones israelíes, entre ellos Marwan Barguzi de Fatah, Abd al-Jaliq al-Natshe de Hamas y Abd al-Rahim Malluh del Frente Popular. Tras constatar la peligrosidad de la situación actual, los presos decidieron abanderar una iniciativa de reconciliación nacional para evitar el derramamiento de sangre palestina.

Además de proclamar el derecho del pueblo palestino a establecer su propio Estado independiente en los territorios ocupados por Israel desde 1967, el documento remarca la necesidad de formar un gobierno de Unidad Nacional. Fatah lograba así recuperar la iniciativa tras varios meses de parálisis provocada por la inesperada derrota electoral y, además, lograba que Hamas se alejase de su programa maximalista al reconocer *de facto*, como ya lo hiciera la OLP en 1988 en la Declaración de Argel, al Estado israelí en el 80% del territorio de la Palestina histórica. Otros avances significativos fueron el compromiso de recurrir a “la acción política, negociadora y diplomática” (bajo la batuta del presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas) y “limitar la resistencia contra la ocupación a Cisjordania y Gaza” (y, por lo tanto, descartar los atentados en territorio israelí).

El Plan Abrams: la estrategia de la Administración Bush

A pesar de su extraordinaria relevancia, debe descartarse la posibilidad de que la iniciativa palestina tenga un impacto inmediato en la reactivación de las negociaciones o en la interrupción del boicot internacional contra el

gobierno de Hamas. Esta aparente contradicción se explica fácilmente si tenemos en cuenta que, desde hace ya mucho tiempo, los palestinos carecen de capacidad para influir en el proceso de paz. En realidad, las negociaciones se desarrollan entre Israel y Estados Unidos, con la marginación evidente de los palestinos pero, también, de la Unión Europea o de cualquier otro actor internacional que pueda equilibrar la balanza.

La Administración de Bush respalda sin fisuras la imposición de las nuevas fronteras permanentes israelíes por medio de la construcción del muro de separación, denominado eufemísticamente por los israelíes "valle de seguridad". El programa de gobierno israelí, aprobado el pasado 4 de mayo, establece que se darán los pasos necesarios para "establecer las fronteras permanentes del Estado" y manifiesta que, de no haber acuerdo con la parte palestina, se hará de manera unilateral teniendo en cuenta la opinión de "los amigos de Israel en el mundo y, a su cabeza, Estados Unidos y el presidente George W. Bush".

Merece la pena recordar que el 14 de abril de 2004, en el curso de una visita a Washington, Ariel Sharon recibió una carta de garantías por parte del presidente George W. Bush en la que se resumía la posición norteamericana ante el proceso de paz. Lo más significativo de dicha carta puede resumirse en tres puntos. En primer lugar, "Estados Unidos reitera su firme compromiso con la seguridad de Israel, incluido su derecho a unas fronteras seguras y defendibles y a preservar y fortalecer su capacidad de disuasión y defensa contra cualquier amenaza o cualquier posible combinación de amenazas". En segundo lugar, la carta señalaba que "está claro que un marco justo, duradero y realista para solucionar la cuestión de los refugiados palestinos como parte de cualquier acuerdo sobre el estatuto final requiere que éste sea encauzado hacia el establecimiento de un Estado palestino y el asentamiento de los refugiados sobre él, más que en Israel". En tercer y último lugar, se insiste en la necesidad de que Israel tenga unas fronteras seguras que deberían "surgir de las negociaciones entre las partes de acuerdo con las resoluciones 242 y 338. A la luz de las nuevas realidades sobre el terreno, incluidos los principales centros de población israelíes ya existentes, no es realista esperar que el resultado de las negociaciones sobre el estatuto final sea un absoluto y completo retorno a las fronteras del armisticio fijado en 1949, como han demostrado todos los esfuerzos previos para alcanzar una solución basada en el esquema de los dos Estados. Es realista pensar que cualquier acuerdo sobre el estatuto final sólo

pueda alcanzarse sobre la base de cambios mutuamente acordados que reflejan dichas realidades”.

Con el término “nuevas realidades”, el presidente Bush hacía referencia a los asentamientos (a los que pasaba a denominar “centros de población israelíes”) construidos ilegalmente desde que en 1967 arrancase la ocupación y que suponían una clara violación de la Cuarta Convención de Ginebra. Dicha Convención establece en su artículo 49 que “la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”. En abierta contradicción, Israel había desplazado una parte significativa de su población a los territorios ocupados, en particular a Cisjordania y Jerusalén Este, donde se concentraban a finales de 2006 más de 450.000 colonos, la mitad de ellos en torno a la ciudad sagrada. Al respaldar los planes de Sharon, la Administración norteamericana dificultaba la aparición de un Estado palestino puesto que la anexión de los grandes bloques de asentamientos de Cisjordania como Ariel, Ma`ale Adumim, Givat Zeev, Gush Etzion y Kiryat Arba (que representan el 15% del territorio cisjordano), partirían en tres a Cisjordania poniendo en peligro la continuidad territorial de dicho Estado.

Por lo tanto, todo parece indicar que, a pesar de la aprobación del Documento de los Prisioneros y la constitución de un eventual gobierno de unidad nacional, el Gobierno Olmert intentará imponer las nuevas fronteras de Israel por medio de la finalización del muro, lo que implicará la anexión de porciones significativas del territorio palestino. Aunque el programa de gobierno israelí señala que intentará alcanzar “un acuerdo con los palestinos”, también afirma que “si los palestinos no actúan como corresponde en el futuro cercano, el Gobierno determinará por sí solo dichas fronteras”.

Lo que es más importante, la nueva posición de Washington vaciaba de contenido cualquier futura negociación, ya que respaldaba inequívocamente las reivindicaciones israelíes dando la espalda a los palestinos que quedaban nuevamente desamparados. Todo ello sentaba un peligroso precedente dada la voluntad de Estados Unidos de arrogarse el derecho de dictar los términos de cualquier futuro acuerdo al margen de la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Era la imposición a los palestinos de los resultados de una negociación en la que no participaban, pues se desarrollaba entre israelíes y norteamericanos.

La absoluta prioridad de la Casa Blanca es Irak, que consume la mayor parte de las energías de sus secretarios de Defensa y Asuntos Exteriores. Antes de iniciarse la invasión del país, Bush defendió que la instauración de un régimen democrático en Irak crearía un efecto dominó que se extendería por todo Oriente Medio y acabaría alcanzando a los territorios ocupados. No obstante, las dificultades experimentadas en el frente iraquí y la victoria electoral de Hamas han llevado a la Administración norteamericana a abanderar las sanciones internacionales contra el Ejecutivo palestino.

No por casualidad, el Informe Baker-Hamilton, como se conoce al trabajo elaborado por el bipartidano Grupo de Estudios sobre Irak, advirtió de la necesidad de abordar la problemática mediorientales en su conjunto: "Estados Unidos no puede alcanzar sus objetivos en Oriente Medio a menos que aborde directamente el conflicto árabe-israelí y la inestabilidad regional. Debe existir un compromiso renovado y sostenido de Estados Unidos con una paz árabe-israelí global en todos sus frentes: Líbano, Siria y el compromiso del presidente Bush de junio de 2002 en torno a una solución de dos Estados para Israel y Palestina. Este compromiso debe incluir negociaciones directas con y entre Israel, Líbano, Siria y los palestinos (que acepten el derecho de Israel a la existencia)"².

Tras constatar que no existe una solución militar del conflicto y que la población israelí está cansada del estado permanente de guerra, la recomendación número 17 de Grupo de Estudios sobre Irak establece cuáles deberían ser los elementos necesarios para una paz negociada: las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad y el principio "territorios a cambio de paz", el fuerte respaldo al presidente Mahmud Abbas y a la Autoridad Palestina, un mayor esfuerzo para consolidar el alto el fuego alcanzado en noviembre de 2006, el respaldo a un gobierno de Unidad Nacional palestino y, por último, las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo basado en el esquema de los dos Estados que resuelva definitivamente las cuestiones de fronteras, asentamientos, Jerusalén, refugiados y final del conflicto. En caso contrario, el Informe advierte que "es un axioma que cuando el proceso político se rompe existe violencia sobre el terreno".

A pesar de su relativo interés, las recomendaciones realizadas por el Informe Baker-Hamilton parecen haber caído en saco roto, ya que la

² http://www.usip.org/isg/iraq_study_group_report/report/1206/iraq_study_group_report.pdf.

Administración Bush ha anunciado el envío de un nuevo contingente de tropas a Irak y, además, ha reivindicado la vigencia de la caduca Hoja de Ruta. Este itinerario de paz, aprobado en 2003 tras meses de arduas negociaciones entre los miembros del Cuarteto, tan sólo fue un intento norteamericano de cortocircuitar cualquier iniciativa diplomática europea.

Todo parece indicar que el plan norteamericano pasa más bien por el fortalecimiento de Fatah y la supresión de Hamas. La Administración Bush no está en absoluto interesada en la formación de un gobierno de unidad nacional que salve la cara a Hamas, después de un año de estrecho cerco que ha dañado mucho más de lo que se cree la credibilidad de la formación islamista. La concesión de un ayuda de 86 millones de dólares para armar a la guardia presidencial, a la que entrena la propia CIA en dos campamentos situados en Ramallah y Jericó, ha sido contemplada por algunos sectores como un intento de encender la llama de una guerra civil palestina. En las últimas semanas también han entrado a los territorios palestinos miles de rifles y municiones enviados desde Egipto y Jordania.

Al considerar que una implicación diplomática norteamericana podría contribuir a reforzar a Hamas, la Casa Blanca ha apostado por una estrategia de contención y apaciguamiento: mejora paulatina de las condiciones de vida de la población palestina y canalización de las ayudas internacionales a través de la Presidencia de la Autoridad Palestina lo que, al menos en teoría, debería ayudar a Mahmud Abbas y a su partido Fatah a recobrar el terreno perdido en estos últimos años. Como ocurriera en Irak y Líbano, Bush podría estar apostando de nuevo por el caballo perdedor, ya que no tiene en cuenta que, en la actualidad, cualquier signo de dependencia de Washington puede ser interpretado como una muestra de sumisión y, en consecuencia, convertirse en un regalo envenenado para el propio presidente palestino.

En este contexto cobra especial significado el Plan Abrams, concebido en febrero de 2006 y que cuenta con el respaldo de Condoleezza Rice, que lleva el nombre del vicepresidente de Seguridad Nacional Elliot Abrams, considerado el último "neocon" de la Administración Bush, y en el que también habrían tomado parte importantes neoconservadores adscritos a la vicepresidencia, entre ellos David Wurmser y John Hannah. La Administración Bush pretendería reforzar a Mahmud Abbas y a Muhammad Dahlan dándole los medios para retomar la calle y desmantelar las organizaciones armadas, para cumplir así uno de las

condiciones de la Hoja de Ruta y poder avanzar en la imposición de un Estado palestino transitorio sin unas fronteras definidas. Así cobran sentido las recientes afirmaciones de la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, que en la Cumbre de Davos, celebrada el 25 de enero de 2007 en la ciudad suiza, advirtió al presidente palestino de que cualquier acuerdo entre Fatah y Hamas en torno a la formación de un gobierno de coalición acabaría con toda esperanza de reanudar el proceso de paz durante lo que queda de mandato de George W. Bush.

Según un informe del *Conflicts Forum*, los planes de Abrams irían mucho más lejos: "El pasado enero, inmediatamente después de la victoria electoral de Hamas, Abrams recibió a un grupo de hombres de negocio palestinos en su despacho de la Casa Blanca a los que mencionó un 'golpe por la fuerza' contra el recién elegido gobierno de Hamas: el derrocamiento violento de su liderazgo con armas suplidas por Estados Unidos"³. Este plan ha sido abiertamente criticado por miembros de los departamentos de Estado y de Defensa, que lo consideran inviable y altamente peligroso para el conjunto de Oriente Medio. Tampoco los países fronterizos –Egipto, Jordania y Siria– están demasiado interesados en favorecer una guerra civil palestina que podría propiciar un nuevo estallido de violencia en la zona de impredecibles consecuencias.

En su reciente gira por Oriente Medio, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, presionó al presidente Mahmud Abbas para que aceptara la creación de un Estado provisional sin unas fronteras claramente definidas, tal y como recoge la Hoja de Ruta. Tras la negativa del *rais* palestino, Rice planteó la posibilidad de reanudar las negociaciones de paz por medio de la convocatoria de una cumbre trilateral palestina-israelí-estadounidense en las próximas semanas. Este súbito interés de la Casa Blanca en el proceso de paz parece responder básicamente a la necesidad de frenar otras iniciativas internacionales, en particular las planteadas desde diversos países europeos y por parte de la comunidad árabe. De esta manera se conseguiría evitar la internacionalización del conflicto, eventualidad que siempre ha alarmado a la Administración americana por la posibilidad de que una intervención más activa de la comunidad internacional pueda obligar a la creación de un Estado palestino no sujeto a los dictados israelíes.

³ Conflicts Forum Reports, "Elliot Abrams' Uncivil War", 7 de enero de 2007: <http://conflictsforum.org/2007/elliott-abrams-uncivil-war/>.